

Señor:
JUEZ CONTITUCIONAL (Reparto)
 E.....S.....D.

Referencia: Acción Especial de Tutela
Accionante: LUZ HORTENCIA URBINA LANA O
Accionados: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - PARTIDO LIBERAL COLOMBINO.

LUZ HORTENCIA URBINA LANA O mayor de edad, identificada civilmente al pie de mi respectiva firma, en mi calidad de accionante, ante ustedes y con el debido respeto, acudo ante su Despacho para promover **ACCION DE TUTELA**, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos Reglamentarios 2591 de 1.991 y 1382 de 2.000, en contra de **LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y SOLIDARIAMENTE AL PARTIDO LIBERAL COLOMBINO** Representadas legalmente por quien haga sus veces al momento de la notificación de esta acción, a fin de cobijar la protección al **Derecho al debido Proceso Administrativo, Acceso a la Administración de Justicia, Derecho de Elegir y ser Elegido, y Derecho de Igualdad.**

Todo esto relacionado a los siguientes:

HECHOS.

- 1) Actualmente me desempeño como edil con tres periodos consecutivos, en casi 12 años de servicios a la comuna 1, en representación de 32 barrios de la ciudad de Valledupar, en la cual nunca he tenido antecedentes de una sanción disciplinaria al partido Liberal del cual pertenezco.
- 2) El día 29 de Julio del 2023, me presente ante las instalaciones de la Registraduría Nacional de la Ciudad de Valledupar, a fin de realizar los trámites nuevamente a mi inscripción de candidatura, dichos funcionarios comenzaron a realizar el procedimiento de la huella biométrica, y me solicitaron mis documentos de identidad a fin de corroborar con mi cedula de ciudadanía mi información.
- 3) Posteriormente a todo esto, y consultar en la plataforma de la Registraduría Nacional, verificaron que todo estaba correcto, que no existía ningún inconveniente legal a mi inscripción, a lo cual quedamos contentos al nuevamente ser candidatos en estas contiendas electorales.
- 4) Sin embargo, al poco tiempo, nos enteramos posteriormente que las listas a las juntas administradoras locales se habían caído, lo cual nos dirigimos nuevamente junto con mi esposo a la Registraduría Nacional a verificar dicha información, allí nos manifiestan que el partido no había llevado los avales, por lo tanto, no se había inscrito ninguna lista de la junta administradora locales del partido liberal.
- 5) En vista de estos acontecimientos, mi candidatura no fue admitida supuestamente porque no cumplía con los requisitos exigidos por la ley, alegando la registraduría que a dichas listas le faltaba el aval del partido liberal, no obstante, no se entiende como se realizó el proceso de la biometría y fue subido dicha información a la plataforma, dado que si la hubiese rechazado

inmediatamente me hubiesen comunicado esa información al momento de mi inscripción, y no posteriormente al haber realizado dicho trámite.

- 6) Ante esta situación, no entendemos si por problemas internos o descuido de sus funcionarios de la Registraduría Nacional, no fue posible la inscripción en la plataforma de mi candidatura, lo cual está perjudicando mi Derecho Constitucional de elegir y ser elegido, y más aún en decepcionar el apoyo de mi gente la cual he defendido sus intereses por más de 12 años de servicios.
- 7) La Registraduría Nacional del Estado Civil, me está negando un Derecho Fundamental consagrado en la Constitución Política, además no solo me está negando una posibilidad política de defender los intereses de mi pueblo, me está afectando significativamente mi salud, y mi economía familiar, por qué parte del presupuesto de gastos, se generan de los recursos que el estado nos da por compensación en los temas políticos y el hecho de no participar en estas contiendas electorales me hace perder importancia ante mi comunidad.
- 8) Por medio de la anterior solicito las siguientes:

PETICIONES

Acreditada como está la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, es procedente el otorgamiento de la tutela en amparo de mis derechos fundamentales vulnerados, en especial de la garantía y efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Magna; **Derecho al debido Proceso Administrativo, Acceso a la Administración de Justicia y Derecho de Elegir y ser Elegido.**

En tal virtud, solicito:

PRIMERO: Solicito ordenar a la **REGISTRADURIA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DE VALLEDUPAR Y SOLIDARIAMENTE AL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO** que el término improrrogable de 48 horas, avale mi inscripción como edil del Partido Liberal Colombiano en la Comuna 1 de la ciudad de Valledupar, a fin de poder iniciar mi campaña política en defensa de los intereses de mi comunidad.

SEGUNDO: Solicito pedir a su despacho que ordene a la **REGISTRADURIA ESPECIAL DEL ESTADO CIVIL DE VALLEDUPAR**, la inclusión de mi nombre en el tarjetón electoral a fin de mi reconocimiento constitucional de elegir y ser elegido.

TERCERO: Solicito en protección a mi Derecho de Igualdad se me conceda dichas pretensiones en un caso similar ocurrido con la candidatura de la doctora Alexandra Pineda a la candidatura de la Gobernación del Cesar.

CUARTO: Que así mismo todos los candidatos de la lista de ediles del Partido Liberal sean Habilitados y sus candidatos inscritos como contempla la ley en estos casos.

FUNDAMENTO DE DERECHO

DERECHO DE ELEGIR Y SER ELEGIDO: El artículo 40 Constitucional consagra el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y establece, entre otras cosas, que por regla general todas las personas tienen derecho a elegir y ser elegidas.

Cuando la acción de tutela procede para evitar un perjuicio irremediable ante la amenaza o vulneración del derecho a elegir y ser elegido, la protección se centra en lograr que el ejercicio de tal derecho no se vea afectado o perturbado, toda vez que el ordenamiento legal contempla un calendario definido para llevar a cabo dicho proceso. Así, por ejemplo, el derecho a elegir no podría protegerse si el acceso a las urnas es impedido a alguien que está legalmente habilitado para hacerlo. Por su lado, frente al derecho a ser elegido, la protección busca permitir la participación del candidato que cumpla los requisitos señalados por la ley para postularse y que, en caso de llegar a ser elegido, se le permita cumplir el periodo para el cual fue elegido, salvo cuando por vía judicial la misma ha sido declarada nula o el mandato sea revocado en los términos de la Constitución.

El derecho a elegir y ser elegido es, un derecho de doble vía, en el entendido de que se permite al ciudadano concurrir activamente a ejercer su derecho al voto o, también, a postular su nombre para que sea elegido a través de este mecanismo. Para la Corte Constitucional, la primera connotación es sinónimo de la libertad individual para acceder a los medios logísticos necesarios e informativos para participar efectivamente en la elección de los gobernantes, en una doble dimensión de derecho-función. En el mismo sentido, la segunda característica, que podríamos llamar pasiva, consiste en el derecho que se tiene a ser elegido como representante de los votantes en un cargo determinado.

DEBIDO PROCESO: es un derecho fundamental de inmediato cumplimiento consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia: “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas

El debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal, para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. Por un lado, se refiere a los medios que toda persona tiene para hacer valer sus derechos, es decir, para asegurar o defender sus libertades; esto se conoce como “derecho a un recurso”. El debido proceso incluye también las condiciones que deben cumplirse para asegurar que toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantizar el cumplimiento de sus derechos; esto se conoce como “derecho al debido proceso legal”.

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

El debido proceso administrativo impone a las entidades del Estado adelantar cualquier actuación o procedimiento administrativo, cuyo propósito sea crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, con la estricta observancia de los lineamientos previamente consagrados por el legislador, esto con el objeto de garantizar a los ciudadanos que puedan verse afectados por el ejercicio de la función pública, la protección de sus derechos de contradicción y defensa.

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Contenido y alcance

El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia se encuentra consagrado en el artículo 229 de la norma superior en los siguientes términos: Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. Este derecho ha

sido entendido como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley. Por medio de su ejercicio se pretende garantizar la prestación jurisdiccional a todos los individuos, a través del uso de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia constituye un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales, ya que, como ha señalado esta Corporación “no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”. Por consiguiente, el derecho de acceso a la administración de justicia se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos.

PRUEBAS MATERIALES

1. Copia del Derecho de petición radicado el día 25 de agosto del 2023 ante la Registraduría Nacional del Estado Civil de Valledupar.
2. Copia de respuesta emitida por la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante oficio No. 0001797.
3. Anexo pruebas fotográficas y copia de cedula de ciudadanía.

JURAMENTO

Bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación de la presente, manifiesto, que nunca he interpuesto acción de tutela ante otra autoridad por los mismos hechos. (Artículo 37 - Decreto 2591/91)

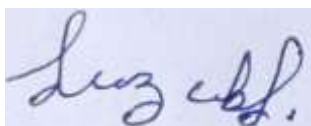
NOTIFICACIONES.

Recibiré notificación en la Carrera 4 No. 17 – 134 Barrio el Carmen de la Ciudad de Valledupar, teléfono 3223849734.

A las partes demandadas, **Registraduria Especial del Estado Civil de Valledupar** en la Carrera 19 No. 13b -37, correo electronico notificacionjudicial@registraduria.gov.co.

Al **Partido Liberal Colombiano** en la Avenida Caracas No 36 – 01 de la Ciudad de Bogota, correo electronico secretariageneral@partidoliberal.org.co.

Atentamente,



LUZ HORTENCIA URBINA LANA O
C.C No. 42.493.887.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA


NÚMERO **42.493.887**

URBINA LANA O

APELLIDOS
LUZ HORTENCIA

NOMBRES

LUZ HORTENCIA
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-SEP-1957**

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

25-JUL-1977 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Alexander Vega Rocha
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



A-1200100-01147456-F-0042493887-20200716 0071279089A 1 9912649039

SECRETARÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL